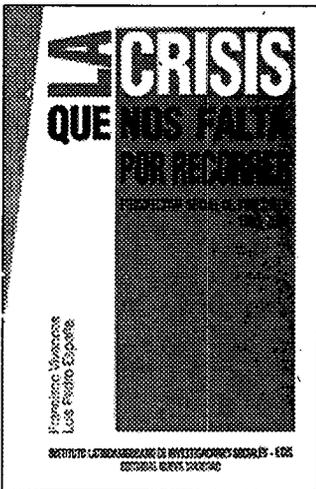


La crisis que nos falta por recorrer

¿Ya hemos pasado lo peor?

Klaus Vöthróder



Este es un libro triste y sombrío. Si fuera una obra teatral, habría que clasificarlo como una tragedia. Trata de una generación perdida, de un pueblo que se encuentra en un punto de tiempo, en 1992. Si este pueblo mira 13 años hacia atrás, observa una crisis que ya ha recorrido. Y si este pueblo mira hacia adelante, se observa la crisis que le falta por recorrer. La diferencia es la pendiente. Mientras, durante los últimos 13 años, la pendiente era negativa, desde ahora la pendiente será positiva. Así esperan por lo menos los autores del libro: que, después que la crisis ha tocado fondo, desde ahora las cosas van a mejorar. Pero, claro, solamente si se cumplen algunas condiciones.

Si todo va bien, hasta el año 2005 se podrán recuperar algunos de los indicadores sociales, los cuales se han deteriorado en los últimos 13 años, durante la llamada «década perdida de los 80». Esto quiere decir que más o menos en el año 2005 muchos venezolanos, que se vieron confrontados con el empobrecimiento, podrán contar con un nivel de vida semejante al de finales de 70 o principios de los 80. Pero solamente en el mejor de los casos. A

esta triste y poco alentadora conclusión llegaron los investigadores, el economista Francisco Vivanco y el sociólogo Luis Pedro España, en su libro «La crisis que nos falta por recorrer. **Prospectiva social de Venezuela 1992-2005**», publicado por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), conjuntamente con la Editorial Nueva Sociedad.

La perspectiva fundamental del libro es la relación entre lo social y lo económico o el dilema entre **eficiencia económica y equidad social**. En un primer paso los autores analizan los últimos 15 años desde dos tipos de vinculaciones que intentan relacionar la eficiencia y la equidad, la política económica y la política social. Estas dos relaciones, las llaman el «**vínculo populista**» y el «**vínculo liberal**». Para el vínculo populista, el estado es el garante de la equidad, independientemente de los mecanismos del mercado. Que la logre es otro asunto. Para el vínculo liberal, el ciudadano es el responsable principal de su nivel de vida. La equidad está garantizada por los mecanismos del mercado, puesto que la intervención estatal solamente introduce distorsiones en vez de garantizar mayor equidad y eficiencia (pág. 12).

Desde el año 1945 el vínculo populista fue un modo exitoso de enfrentar la fase de modernización del país y cumplió su tarea histórica. Pero no generó las condiciones para su propia superación, es decir, para una próxima fase de modernización. El agotamiento del vínculo populista se evidenció sobre todo en la medida en que el Estado ya no disponía más de recursos suficientes por concepto de ingresos petroleros para enfrentar las demandas crecientes de los diferentes sectores de

la sociedad. Desde este momento el logro de la vinculación entre lo económico y lo social depende cada vez más del aumento de la eficiencia interna, de un aumento de la productividad y de la capacidad de crear riqueza. Un proceso que avanza muy lento.

Cuando ya no se pudieron posponer los cambios necesarios, y tras los intentos fracasados de mantener el vínculo populista, agotadas las condiciones del desarrollo tradicional, se presentó el vínculo liberal de la política de ajustes de 1989-1990 y de la política económica de los años siguientes. Tras analizar los métodos, alcances y fracasos del Programa de Ajuste Estructural (PAE), los autores examinan ampliamente la relación entre lo económico y lo social dentro de este esquema (neo)liberal. Respecto a la caída en los niveles de vida, que ya comenzó en los años 80, ellos constatan que no es sólo una consecuencia del PAE sino también de la ausencia de una política social y de ingresos correlativa. Su crítica se dirige sobre todo contra el supuesto del modelo liberal de que la mejor política social (política de ingresos o de redistribu-

ción de la renta) es el crecimiento económico. Primero crecer, para luego distribuir. Ellos concluyen que el crecimiento económico es necesario para lograr un mayor bienestar, pero no es suficiente por sí solo. Más bien en el corto y mediano plazo se necesita una distribución de ingreso más equitativa para lograr ciertas metas de crecimiento económico sostenible, que no pueden alcanzarse sin ciertos mecanismos de la intervención en la estructura distributiva.

Después de analizar la relación entre la política social y económica dentro de los vínculos populista y liberal, los autores desarrollan un modelo de simulación económica con diferentes escenarios. El propósito de este ejercicio es comprobar dos hipótesis que contradicen los supuestos del Programa de Ajuste Estructural introducido en el año 1989 (pág. 61):

- (1) si no se modifican las estructuras de distribución de ingresos, el crecimiento económico real será muy modesto y superará apenas la tasa de crecimiento poblacional;
- (2) si no se refuerza el capital social del país, el crecimiento económico alcanzado en el corto plazo no será sostenible y no alcanzará las crecientes necesidades de la población.

Los autores parten de un **escenario deseable del desarrollo social** para el año 2005 y extrapolan estos valores hacia atrás, hacia 1992, para calcular que un desarrollo económico permite alcanzar estas metas. Las variables que toman están agrupados en cuatro grupos: **educación, salud, nutrición e infraestructura**. Para realizar estas metas deseables en el año 2005, el crecimiento del producto interno debería estar entre 4% y 6% anual bajo el supuesto de que no se introduzcan cambios sustantivos en la estructura económica del país. En el más optimista de los escenarios, en las áreas de educación y nutrición podríamos acercarnos a las metas establecidas, mientras en las áreas de salud e infraestructura se verían mejoras menores. La pobreza se re-

Bajo el actual sistema productivo y distributivo, en el mejor de los escenarios posibles, lo máximo que se puede esperar es la reducción de algunas brechas sociales abiertas durante la década de los ochenta y los primeros años de los noventa.

duciría hacia el año 2005 hasta un nivel esperado de 32% en el mejor de los casos y cerca de 40% en el caso menos optimista. Estas cifras evidencian que no habrá un cambio importante del nivel de pobreza, si las actuales tendencias de la producción y distribución siguen su rumbo.

En el paso siguiente los autores se preguntan: ¿Cuántos recursos, es decir qué tamaño del gasto social del Estado es necesario para alcanzar este bienestar social ya reducido? Dado el resultado anterior tan poco alentador, ahora viene otra desilusión. Con el fin de alcanzar en el año 2005 el escenario de referencia, el gasto público tendría que aumentar anualmente un 20% real, lo cual supondría un aumento de los ingresos fiscales similar al de los años entre 1974 y 1981 (pág. 101). Estas tasas de crecimiento para concretar el escenario deseable chocan con las realidades económicas y con las restricciones que impone un crecimiento sano y sostenible de una economía nacional: restricciones de la balanza de pagos, conservación de las reservas internacionales, generación de ahorro interno, niveles de consumo privado, limitaciones del déficit fiscal y disponibilidad de mano de obra.

Bajo la restricción de mantener estos equilibrios fundamentales de la economía venezolana, internos y externos, los autores recalculan el desempeño económico razonable del país, lo cual arroja por resultado tasas del crecimiento del PIB real entre 1% y 2%. Estas tasas son inferiores a la tasa del crecimiento poblacional, lo que significa un crecimiento cero o negativo del PIB per cápita. De este escenario los autores sacan la simple conclusión de que, desde el actual patrón estructural, el crecimiento económico sostenido y a largo plazo será inviable en Venezuela (pág. 102). De ahí resulta que al largo plazo la viabilidad del país depende del justo compromiso que se alcance entre los equilibrios económicos básicos y la posibilidad de sostener su estructura político-social (pág. 103). Pero este compromiso exige varios cambios

institucionales y estructurales:

- (1) La reestructuración y reducción del Estado y su limitación en la producción de bienes públicos puros.
- (2) La recompensación del gasto público y la concentración en su componente inversión: mejoramiento de la infraestructura para la producción interna, aumentar la eficiencia de su propia producción de bienes públicos y fortalecer la inversión en los recursos humanos.
- (3) La modificación de las reglas de determinación y composición del gasto público para obtener asignaciones del presupuesto óptimas que no están basadas en criterios burocráticos o presiones políticas de los grupos más fuertes.
- (4) La reformulación del modo de funcionamiento de la economía venezolana, es decir, la recuperación del papel de los precios de mercado como asignadores de recursos y la redistribución de las esferas propias del sector público y del privado.

En el área estrictamente social se necesitan reformas concretas urgentes. Aquí los autores destacan la diferencia entre una política social al mediano y largo plazo, que es principalmente una tarea del «Estado», es decir, consiste en políticas sociales estructurales y permanentes; y una política social al corto plazo, que es tarea del «Gobierno», es decir, se desarrolla en medidas que corrigen las oscilaciones.

A Esta generación le tocan unos retos que no tuvo la pasada, porque le toca cargar con las inviabilidades del pasado y construir la viabilidad del futuro, cosa que no es fácil.

Una **política social estructural** necesita un acuerdo político que garantice su permanencia y esté constituido sobre todo por dos elementos:

- (1) Una **política de ingreso**, que persigue lograr el crecimiento de los salarios reales y aumentar la demanda de empleo productivo.
- (2) La **reforma del sector social público** respecto a la delegación de funciones, privatización, descentralización y desconcentración en el campo educativo, seguridad social, salud y infraestructura. El Estado debe generar los estímulos y las condiciones para que la sociedad civil produzca sus propios servicios básicos.

Como complemento es necesaria una **política compensatoria o de ajuste social** al corto plazo para atender a los grupos vulnerables o socialmente más débiles. Esta política, estrictamente temporal, precisa una revisión con el fin de focalizar más eficientemente el sistema de subsidios directos para que estos recursos se destinen a los sectores más necesitados y no a sectores de la sociedad que poseen la capacidad de conseguirlos por sí mismos.

Para llevar a cabo estas políticas sociales, y dadas las limitaciones de los recursos del Estado, se requiere un aumento de los ingresos fiscales, lo cual los autores ven posible sobre todo a través de una ampliación de la tributación interna y de una reasignación del gasto público en su conjunto.

En un anexo metodológico, los autores ofrecen al lector interesado en las áreas matemática, estadística y econométrica, su metodología para las estimaciones de los indicadores económicos y sociales y para la construcción del conjunto de regresiones.

En su libro, compacto y de un lenguaje muy denso, Vivancos y España logran de una manera impresionante vincular lo económico con la cuestión social, y demuestran que no habrá crecimiento económico sostenible si no se soluciona el problema social y eso **al mismo tiempo**.

Lo significativo de este investigación no son tanto las estimaciones en sus cifras exactas. Cada modelo econométrico se basa al fin en el comportamiento humano y en el supuesto de que éste es racional. Como se sabe, es un supuesto no siempre acorde con la realidad. Además los coeficientes estimados para el pasado cambian por nuevas informaciones, e introducen fuentes de error en un modelo cuando se extrapola al futuro. Por ejemplo, los autores estimaron un crecimiento positivo del PIB venezolano para 1993 de 1,4% o sea de 1,6% (pág 140/141) según el escenario. De facto, la economía venezolana decreció en 1993 alrededor de 1%. La pregunta es siempre si estas estimaciones incorrectas se potencializan a lo largo de la estimación econométrica o habrá una compensación por tasas de crecimiento en el futuro más elevadas que las estimadas. Lo significativo de este libro son sus afirmaciones tendenciales, obtenidas a partir de un modelo centrado en relaciones cuantitativas, que en todo caso son superiores a la que podrían hacerse sin base empírica. A pesar de las debilidades de las extrapolaciones al futuro, las conclusiones son sumamente relevantes: bajo el actual sistema productivo y distributivo, en el mejor de los escenarios posibles, lo máximo que se puede esperar es la reducción de algunas brechas sociales abiertas durante la década de los ochenta y los primeros años de los noventa. Conociendo este escenario, la magnitud de los cambios que el país exige y la lentitud de la recuperación de los indicadores sociales, se ve urgente la introducción de los cambios necesarios, diseñados por los autores, mejor hoy que mañana, porque el mejoramiento del bienestar es una cuestión por lo menos de una decena de años. Así que el libro resulta sombrío pero sobre todo esclarecedor. Luis Pedro España concluye: «A Esta generación le tocan unos retos que no tuvo la pasada, porque le toca cargar con las inviabilidades del pasado y construir la viabilidad del futuro, cosa que no es fácil.»